

Nueva Sociedad Nro. 141 Enero - Febrero 1996, pp. 19-33

# La izquierda en ascuas y en ciernes

Jorge Castañeda

**Jorge Castañeda:** cientista social mexicano.

**Nota:** este texto corresponde al prólogo de la cuarta edición mexicana de *La utopía desarmada*, Joaquín Mortiz, de próxima aparición.

## Resumen:

**Mucho, muchísimo, ha sucedido en México y el resto de América Latina desde que apareció la primera edición mexicana de *La utopía desarmada*, en octubre de 1993. A lo largo y ancho de todo el continente los acontecimientos se precipitaron, y si bien es imposible hacer de este prólogo un pronóstico de la evolución ulterior, ni tampoco un reportaje periodístico ceñido a la actualidad, se imponen una serie de puntualizaciones y ajustes a un texto que conserva sin embargo su pertinencia.**

Son dos los grandes temas que conviene examinar. El primero es de origen exclusivamente mexicano, pero sus repercusiones fueron continentales. Me refiero por supuesto al alzamiento zapatista en el estado de Chiapas el 1º de enero de 1994. El segundo abarca las vicisitudes de la izquierda en diversas partes de América Latina: los altos y bajos en Argentina, Brasil, Venezuela, El Salvador, Colombia y, desde luego, en México.

Pocas eventos propios de la región han conmovido a la opinión pública latinoamericana en años recientes como la sublevación en los Altos de Chiapas. Debido en parte a las falsas expectativas suscitadas por el llamado «milagro mexicano», con motivo también de la entrada en vigor ese mismo día del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y en parte por fin debido al carácter epifenoménico que toda insurrección indígena reviste en nuestro continente, la hazaña de los zapatistas tuvo un impacto singular en el imaginario social latinoamericano. Para unos, recalcó la secular marginación, pobreza, y discriminación de las que son víctimas comunidades indígenas del hemisferio. Para otros, subrayó la continuidad de la infinita violencia que puebla el paisaje latinoamericano, siempre a flor de piel y pronta para estallar. Y por último y de manera más directamente vinculada al propósito de este libro, actualizó el viejo debate sobre la vía militar, y

sobre la viabilidad o falta de perspectivas de la lucha armada revolucionaria en América Latina.

Entre los efectos más marginales de la sublevación figuró un cuestionamiento a lo que se suponía eran las tesis centrales de *La utopía desarmada*. Dicho cuestionamiento comprendía varios aspectos, pero principalmente uno: el estallido aparente de una guerrilla en Chiapas mostraba, según algunos lectores, que la lucha armada y revolucionaria conservaba toda su actualidad.

Más que desmentir los argumentos del libro, el alzamiento chiapaneco vino a confirmar varias tesis totales del texto. La primera es la más fuerte: toda izquierda en América Latina hoy es tendencialmente reformista y pacífica. La discusión al respecto revive una antigua disyuntiva propia de la izquierda latinoamericana sobre «las vías»: vía armada o vía pacífica, o vía electoral o vía militar. Chiapas resucitaba una discusión vieja, ya de más de treinta años, sobre la vigencia y necesidad de la lucha armada en América Latina. Y replanteaba también la persistencia de la doble disyuntiva ya mencionada: o por las armas o por las urnas; o por el socialismo o por la revolución «burguesa». Chiapas, para muchos, revigorizaba la pertinencia de ambos polos «buenos» de la dicotomía descrita: la revolución la pueden hacer guerrilleros heroicos a pesar de una izquierda flácida, y la pueden hacer en el mundo de hoy, a pesar de los espejismos neoliberales y de las externas resignaciones reformistas. El levantamiento zapatista le devolvía, desde esta óptica, actualidad a ambas reivindicaciones: la lucha armada y la revolución. *La utopía desarmada* conformaba, en esta visión optimista y aguerrida, una de las múltiples bajas causadas al *establishment* por la insurrección de las cañadas.

Por años, y en buena medida como resultado del culto a los fusiles y al verde olivo propios de los primeros momentos de la Revolución Cubana, empuñar la ametralladora significaba cambiar el mundo. El apotegma castrista según el cual «El deber de todo revolucionario es hacer la revolución» debía leerse como un llamado a las armas: frente al reformismo y pacifismo de los partidos comunistas escleróticos y cansados, revolución y lucha armada se fundían en una perfecta y completa simbiosis. El hecho de que estas simplificaciones y debates pertenezcan a una historia cada vez más remota no debe nublar su recuerdo: así pensó durante un largo rato una buena parte de la intelectualidad y del activismo de izquierda en América Latina.

La respuesta reformista a estos planteamientos era sencilla y contundente, pero al ser esgrimida por interlocutores cuestionados, tardó mucho en hacer su camino. Correspondió casi por definición a adversarios de la vía armada la tarea de desmontar y desmentir la tesis castrista, y por consiguiente, sus motivaciones siempre fueron puestas en

tela de juicio mediante un proceso de intenciones injusto pero eficaz. La réplica en sí era impecable: el problema de las vías correspondía al ámbito de la táctica; el del carácter histórico de las tareas de transformación revolucionaria pertenecía al dominio de la estrategia. Subsumir la segunda en la primera, arguyendo que por el hecho mismo de recurrir a la violencia y a la formación de un ejército rebelde se resolvía *ipso facto* el dilema del tipo de revolución a la orden del día, y fijar el estatuto de la revolución por venir exclusivamente a partir de la vía emprendida para arribar a ella, constituía un subterfugio teórico flagrante. Pero quienes lo cometían –los jóvenes guevaristas inspirados por la gesta de la Sierra Maestra– paliaban sus debilidades y deficiencias con el cuestionamiento de la sinceridad de sus contrincantes. Por ciertos que fueran los argumentos de los detractores de la lucha armada, su eficacia se veía rápidamente mermada por la verdad última de su supuesta cobardía o indudable renuencia a internarse en la sierra o la selva.

Proliferaron los ejemplos y las refutaciones que enriquecieron el debate a lo largo de los años. Por un lado, surgieron innumerables destacamentos armados cuya estirpe revolucionaria resultaba difícilmente defendible: grupos minúsculos perdidos en los páramos sub-andinos o en los tristes trópicos de las llanuras colombianas; Montoneros en la Gran Buenos Aires cuya valentía no neutralizaba su peronismo trasnochado o sus contubernios con sectores del régimen militar; cónclaves conspirativos en las casas de protocolo del Laguito en La Habana donde se planeaban gloriosos asaltos al cielo a nombre de masas jamás consultadas, rara vez visitadas; por último, el reformismo confeso y exacerbado de los nuevos comandantes con hombreras rojinegras en Managua: otra vez, las armas sin la revolución, si por ella entendemos una transformación de la sociedad a la 1917, a la china, a la cubana. Por otro lado, se multiplicaron los casos paradójicos o inexplicables desde la óptica guerrillera, ya que escindían de nuevo y de otro modo la identidad fusiles-revolución: las profundas reformas sociales y nacionales llevadas a cabo por los hombres armados... del general Velasco Alvarado y sus colegas castrenses en Perú; la revolución real sin armas que trató de consumir, al costo de su vida, Salvador Allende; más tarde, la liberación nacional en miniatura conducida por Maurice Bishop en Grenada hasta su derrocamiento y caída bajo las balas disparadas por sus propios correligionarios.

La reaparición exitosa de varias organizaciones político-militares a finales de la década de los 70 y sobre todo durante la primera mitad del decenio siguiente restauró aparentemente la vigencia de la lucha armada, pero ya sin su mancuerna anterior: la reconstrucción radical de la sociedad. Los sandinistas en Nicaragua descubrieron algo que los socialdemócratas europeos habían intuido años atrás: las probabilidades de tomar el poder suelen ser inversamente proporcionales a la radicalidad del discurso político e ideológico esgrimido. De tal suerte que los centroamericanos en su conjunto –las estrellas del firmamento guerrillero en los 70 y 80–

bajaron el tono de su estridencia; ellos salieron ganando, pero no el alcance de la idea de revolución.

Cuando se produce el estallido chiapaneco, se reanuda el cabo suelto. Las armas se reencuentran con la revolución. El subcomandante Marcos restablece la viabilidad de la revolución porque recurre a las armas; éstas vuelven a convertirse en la prueba definitiva del carácter revolucionario de la lucha. Se cuadra el círculo: las tesis sobre la inviabilidad del recurso a las armas y la obsolescencia de la idea de revolución se vieron repentinamente barridas por las imágenes emblemáticas de San Cristóbal de las Casas. Contra la imagen, en nuestra época, nada es posible: la imagen no miente nunca, y sólo la imagen es verdadera. Marcos y sus correligionarios indígenas en el video de la CNN y Televisa constituían la demostración palpable de la resurrección de la epopeya: de nuevo las armas, las masas y la revolución convergían en la Selva Lacandona.

No obstante, más allá de la pantalla y de los fantasmas enquistados en la cabeza de cada quien, la rebelión zapatista representaba a la vez mucho más, y mucho menos, que la venganza del Yuro o la reconquista de la Sierra Maestra. Y en lugar de refutar las tesis centrales de *La utopía desarmada*, corroboraba justamente dos de ellas: la del fenecimiento de la lucha armada en América Latina, y la resignada –pero difícilmente cuestionable– sobre el desvanecimiento de la problemática revolucionaria en el área.

Uno de los argumentos medulares de *La utopía desarmada* subraya la caducidad –por ahora– de la noción misma de revolución en América Latina. Simplemente dejó de figurar en el orden del día, así como no lo estuvo durante los decenios que precedieron a la Revolución Cubana. A veces se olvida: entre la Revolución Mexicana y la entrada triunfal a La Habana, incluso el principio de una transformación revolucionaria de las sociedades latinoamericanas quedó archivado: por los partidos comunistas que explícitamente enarbolaron un programa de reformas nacionales, agrarias y democráticas de corte estrictamente moderado; por los nacionalistas y populistas –e incluso por movimientos más radicales como el MNR boliviano en 1952– acotados por los límites de sus alianzas con las burguesías más o menos nacionales (Cárdenas, Perón, Vargas); por las figuras épicas como Sandino y Farabundo Martí, que prefirieron concentrar su radicalismo en un desempeño personal heroico y no en una definición programática.

No es sino con la Revolución Cubana, y en realidad hasta la primera Declaración de La Habana (1961), que verdaderamente vuelve por sus fueros el concepto de un rediseño total, cabal, completo, de la sociedad en América Latina. Se mantuvo en la palestra durante casi tres decenios, aunque ya desde comienzos de los años 80 los centraamericanos templaron sus ánimos revolucionarios, en aras de una negociación con

sus adversarios internos, de una hipotética convivencia con sus vecinos y con Estados Unidos, y de su pertenencia a la comunidad financiera internacional. Después, para salvar las apariencias y conservar la fidelidad a la juventud y la gloria, los salvadoreños se refugiaron en una salida lírica y contradictoria: bautizaron sus acuerdos de paz del Castillo de Chapultepec con el bello nombre de «revolución negociada», la primera y última del género. Allí se lee la sinuosidad del camino, y el acercamiento a su fin. Ya no queda más revolución que una que contradice su naturaleza misma en el nombre y contenido.

Nada es eterno: el eclipse de la idea revolucionaria desde mediados del decenio anterior no significa –sería absurdo presuponerlo– que haya sido evacuada para siempre del imaginario social latinoamericano. Frente a cualquier empeño de clausurar la historia con la caída del muro de Berlín, no cabe más que remitirse a los hechos: pasados, presentes y venideros. No existe absolutamente ninguna razón para esperar o temer que nunca más reaparecerá la noción de un cambio ontológico, de fondo y cualitativo en la organización económica, social y política de las sociedades latinoamericanas como aspiración susceptible de movilizar emociones, masas e inteligencias. Hoy, no; mañana, quién sabe. Las poderosas razones que motivaron su ocaso pueden perdurar, o disiparse paulatinamente.

Son tres estas razones: el desmoronamiento ideológico del Este europeo; la imposibilidad conceptual y financiera de contemplar una ruptura con la economía globalizada; y la renuencia a provocar de nuevo las fracturas sociales internas, ideológicas, y hasta familiares que toda ruptura revolucionaria con el *statu quo* inevitablemente entraña. La durabilidad de estos factores es evidente; su persistencia indefinida resulta mucho más dudosa. En el primer caso, no porque se reconstruyan las estatuas de Lenin y se canten de nuevo las odas a Stalin allende la línea Oder-Neisse, sino porque los estragos que la caída del socialismo causó en el ideario de cambio político y social pasarán poco a poco al olvido. El proceso será largo, más prolongado de lo que muchos esperábamos, pero no hay debacle que dure cien años. Las memorias en el mundo actual son cada vez más cortas; los resultados de las transiciones en Europa oriental y la ex-Unión Soviética son inciertos, y las agendas de las sociedades no se detienen. Es difícil, en efecto, vaticinar un resurgimiento del socialismo; no lo es tanto suponer que alguna nueva variante del pensamiento utópico renazca en Occidente, cumpliendo una función análoga al que el islam desempeña actualmente en países de tradición musulmana.

En segundo lugar, la pertenencia a la comunidad financiera internacional genera efectos cada vez más contradictorios. Por un lado, los beneficios de la globalización, por inevitable que sea esta última, no son tan espectaculares como se había prometido; de allí que la amenaza de perderlos tal vez se perciba como menos dramática que hace algunos

años. Pero sobre todo, por la ambigüedad misma de las ventajas de la inclusión, los márgenes de acción que ofrece se van ensanchando. No para hacer cualquier cosa: las posibilidades de grandes trastocamientos del orden económico y social interno de un país o una región siguen siendo diminutas, debido ante todo a las restricciones externas impuestas por la globalización. Pero los matices y variaciones, las oportunidades de ampliar el elenco de políticas públicas se presentan con mayor vigor y firmeza, aun cuando la propaganda correspondiente genere en ocasiones la impresión de una uniformidad monolítica en el mundo entero.

En tercer lugar, la consolidación de los procesos de representación democrática en América Latina, si bien ha tendido a descansar en la aguda avidez de vastos segmentos de la opinión pública de evitar nuevas y desgarradoras conmociones, permite precisamente un ensanchamiento de las opciones que se le presentan al electorado. Para consumir las transiciones en el continente, fue preciso reducir la gama de alternativas disponible: no había democratización aceptable para las principales elites latinoamericanas que hiciera peligrar sus intereses o predilecciones ideológicas. De allí el estrechamiento del espectro político en años recientes. Pero al concluir las transiciones en la mayoría de los países, se comprobó que la resistencia de los nuevos sistemas electorales y políticos frente a disyuntivas más abiertas era mayor de la que se sospechaba. La presencia, y en algunos casos el fortalecimiento de candidaturas, frentes y coaliciones más alejadas del centro, ya sea hacia la izquierda –Brasil, Argentina, Venezuela, El Salvador– o hacia la derecha –México, Bolivia, Perú– resultaron perfectamente asimilables por los electorados, por las instituciones y por las propias fuerzas del pasado y del poder.

Todo esto viene a colación por un sencillo motivo: la historicidad del tema de la revolución en América Latina en el pensamiento utópico es un hecho difícilmente refutable. Si la noción ha entrado y salido del ideario latinoamericano de cambio social en el pasado, lo hará sin duda de nuevo en el futuro. La naturaleza contingente de las causas que borraron el tema de la actualidad, asegura que algún día, alguna versión de la utopía revolucionaria revivirá. Pero esta misma historicidad confirma que hoy el tema, en efecto, ha sido desterrado de ese ideario; no hay lucha revolucionaria contemporánea en América Latina, justamente por las razones expuestas. El entorno ideológico, el contexto internacional y los imperativos de reconciliación interna lo impiden.

Así llegamos a la encrucijada de las armas. Los castristas de los años 60 tenían razón, sólo que al revés. El «tableteo de las ametralladoras» (Guevara) no otorga automáticamente credenciales revolucionarias, pero en general, es difícil emprender la vía militar inspirándose en un esquema reformista. El Che Guevara acertó desde 1959: allí donde prevalecen la realidad o la impresión de otros cauces de expresión del descontento o de

diversas aspiraciones, la lucha armada es práctica y tendencialmente imposible.

Así como la lógica de la lucha electoral y la implacable dinámica de la recolección de votos introduce un sesgo reformista en la estrategia (los sufragios se encuentran y se obtienen en el centro; las posiciones revolucionarias no suelen recibir caudales enormes de votos), en materia de táctica el reformismo de fondo tiende a rechazar el llamado a las armas. El grado de sacrificio y de abnegación que requiere la actividad guerrillera sólo con grandes dificultades puede brotar de un programa reformista. No se entrega la vida ni se resiste la tortura por un aumento en el gasto educativo. Aunque la izquierda en América Latina encierra, como ya se ha señalado, casos de un reformismo armado coyuntural, constituyen excepciones más que la regla. Los zapatistas son una más y, hasta cierto punto, una excepción en el tiempo y en su carácter mismo. A pesar de sus propias afirmaciones, el zapatismo chiapaneco no es un movimiento revolucionario ni tampoco, más que el tiempo de un épico paréntesis de la San Silvestre, un movimiento armado.

Este libro es una plegaria reformista; descarta la posibilidad de una revolución en el continente en el futuro cercano, y minimiza las potencialidades de cualquier programa, aspiración o lucha revolucionaria en nuestras tierras. Asimismo, sostiene que la lucha armada en América Latina es hoy una propuesta en vías de plena extinción. Conviene reafirmar el carácter histórico de ambas afirmaciones: se trata del presente, no del pasado o del futuro. De allí el desencuentro aparente con Chiapas.

De allí también la corroboración de estas tesis por Chiapas. Desde la perspectiva de este prefacio, lo interesante del levantamiento chiapaneco estriba justamente en el carácter reformista del EZLN. En cierto sentido la revuelta en Chiapas confirma a cabalidad la tesis según la cual hoy, en América Latina, toda izquierda es inevitablemente reformista: hasta aquella, en principio armada, indígena y parapetada en el corazón de las tinieblas. Desde sus primeras declaraciones de la selva, los zapatistas y el subcomandante Marcos hicieron hincapié en la tónica reformista de su lucha y demandas: tierra para los campesinos, dignidad para los indígenas, democracia y elecciones libres para los mexicanos en general. De allí no sale revolución alguna, a menos que cualquier cambio político o social, por el mero hecho de su trascendencia o el cúmulo de años de espera que ha implicado, mereciera el título de nobleza de revolución.

Plantear, como lo han sugerido algunos amigos del Ejército Zapatista, que la imposibilidad misma de satisfacer siquiera demandas mínimas como dignidad, tierra, educación y elecciones dentro del actual sistema económico-social convierte el planteamiento de dichas demandas en un acto revolucionario, constituye una excelente respuesta retórica, pero no

equivale a una reflexión teórica. Se entiende el empeño por reiterar la identidad revolucionaria: por más de un siglo, no ha habido peor insulto para una gente de izquierda que ser tildado de reformista. Salvo para los reformistas, quienes sólo atribuyen el calificativo a corrientes afines o susceptibles de serlo. Si nos remontamos a los albores del marxismo y del movimiento socialista en el mundo, rápidamente se comprueba que los límites de tolerancia y de adaptación que el capitalismo forjó a lo largo de los años resultaron infinitamente más anchos y flexibles de lo que muchos, empezando por el propio Marx, anticiparon. La jornada de ocho horas, la contratación colectiva, el derecho de huelga, el sufragio universal, las vacaciones pagadas y el seguro contra el desempleo representaron todas, en su momento, reivindicaciones obreras y populares que parecían desafiar de manera insuperable la capacidad de asimilación del capital. Conformaban en apariencia, por tanto, demandas revolucionarias, ya que implicaban la transformación del sistema. Resultó, para bien de los trabajadores, que estos no se vieron obligados a esperar las calendas griegas de la revolución para descansar y vivir dignamente.

Más allá de la naturaleza de las demandas zapatistas, la índole reformista de la gesta de la selva estriba en el razonamiento novedoso de Marcos, insólito por ser reformista al extremo. El EZLN no se planteó la toma del poder, ni el derrocamiento por la vía armada del régimen de partido de Estado en México, sino la utilización de las armas que empuñaba ante las cámaras para ayudar a quienes carecían de ellas a lograr algo así como la democracia en México. La justificación del movimiento zapatista yace precisamente en las características propias de México, es decir, en la permanencia de un sistema político autoritario, que no permite la eclosión del descontento social por la vía de elecciones provistas de cualquier significado. Marcos se propone liquidar la razón de ser de su propia existencia; de allí el nexo imperativo, innegable, entre el levantamiento, el país y el momento en el que se produce.

Si el zapatismo de fin de siglo no es un movimiento revolucionario, en el sentido estricto de la palabra, para desgracia de muchos de sus admiradores tampoco resultó ser un movimiento armado. Alcanzó a poseer algunas armas, aunque la información disponible sugiere que desde su estreno a comienzos de 1994 comprendió más adeptos que fusiles; el armamento inicialmente en sus manos era mucho más rudimentario de lo que insinuaban las primeras imágenes de Año Nuevo en San Cristóbal de las Casas; el entrenamiento de los combatientes y comandantes fue mucho más somero y superficial de lo deseable. Los soldados de Marcos manifestaron, a lo largo de los casi dos años durante los cuales se han encontrado sometidos al escrutinio público, un comportamiento extraño para una guerrilla. No enfrentaron a su enemigo, no lo hostigaron ni le destruyeron fuerza viva o muerta, no buscaron conquistar territorio o posiciones ni se desplazaron tampoco fuera de sus bastiones. Sostuvieron esta pasividad militar mientras se reponía el



ejército mexicano de la sorpresa del primer golpe, mientras duró la tregua negociada por Manuel Camacho y la diócesis de San Cristóbal, y cuando las fuerzas armadas volvieron al acecho, desarticulando, el 9 de febrero de 1995, prácticamente la totalidad del dispositivo de defensa zapatista.

La única explicación plausible de esta empecinada renuencia a recurrir a las armas, bajo circunstancias en extremo variadas, consiste en su inexistencia: no volvieron a disparar, porque no tenían con qué. El movimiento de Chiapas dependió para su sobrevivencia del manto protector de una opinión pública nacional y extranjera que se conmovió con las imágenes emblemáticas de campesinos indígenas enfrentando a una aviación apabullante, a un Estado autoritario y a un dogma modernizante de libre comercio y Primer Mundo. El zapatismo ha sobrevivido gracias a su debilidad militar, no a su fuerza.

Un grito desesperado y lacerante del comandante David en las conversaciones de julio de 1995, en San Andrés Larráinzar, da la pauta para una reflexión menos ceñida a los acontecimientos del año anterior: «...no queremos la guerra, pero si nos obligan lo vamos a hacer por las justas causas ... si no hay otro camino volveremos a luchar con las armas en la mano». En su doloroso empeño por movilizar de nuevo a la opinión pública, el comandante David pasó por alto lo que durante la guerra de Vietnam le costó el puesto y la paz interna a Robert McNamara: *the credibility gap*, o brecha de credibilidad entre lo que se dice y lo que se hace. Con la excepción de los más convencidos partidarios defensores de los zapatistas, ya prevalecían para entonces serias dudas dentro del gobierno, en la opinión pública y en los círculos internacionales, sobre la verosimilitud de la amenaza esgrimida por David.

El dirigente indígena repitió el desafío de las armas, recurso que durante meses había reportado elevados réditos a los zapatistas, sobre todo cuando era retomado a su vez por el «lobby de la paz»: el conjunto de fuerzas y sectores de la sociedad mexicana e internacional que *convirtieron* la bandera de la paz en un arma poderosa de movilización, sin jamás enfrentar el dilema lógico que encerraba: ¿a qué guerra había que poner término, qué conflagración había que evitar, para lograr esa paz tan anhelada?

Antes de un rápido intento por desentrañar los orígenes de esta inconsistencia conceptual y de responder también a la pregunta ineluctable sobre la seriedad de la amenaza y la existencia de las armas, conviene abrir un paréntesis de corte político. México, al igual que el resto de América Latina, sufre de una consabida escisión de su sociedad –entre ricos y pobres–, de su geografía económica –entre un norte viable y un sur desolado– y en su economía –entre un sector exportador ascendente y una industria y agricultura destinadas al mercado interno y devastadas por la liberalización comercial. Estas fracturas generan otra, también típica

de América Latina, en particular del Brasil, como lo ha señalado atinadamente Roberto Mangabeira Unger: entre la sociedad organizada (empresarios, obreros, burócratas, estudiantes, intelectuales) y la que carece por completo de estructuras organizativas: los pobres de la ciudad y del campo. Los contra-ejemplos indudables –colonos en Santiago de Chile durante la Unidad Popular, habitantes de los cinturones de miseria de San Salvador, comunidades indígenas de Huehuetenango y del Quiché en Guatemala, comunidades de base en ciertas zonas rurales del Brasil– no invalidan la regla que impera en el espacio y en el tiempo. Agotados los grandes soplos organizativos del populismo histórico latinoamericano en los años 30 y 40, cuando las nacientes y acotadas clases obreras y burocracias conquistaron los derechos y las estructuras que hasta hoy conservan, descendió sobre el continente un largo pasmo organizativo. No ha concluido.

En México, a menos de creer en los «mitos geniales» (esos sí) de Solidaridad, o en los sueños guajiros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que confunde manifestantes con votos, y a estos últimos con activistas plenamente concientizados, brillan por su ausencia los éxitos de organización entre los sectores más desfavorecidos y, a la vez, mayoritarios de la nación. Los escasos ejemplos son de burda manipulación clientelar de colonos y paracaidistas urbanos, de esporádicos y efímeros movimientos campesinos, de desesperadas luchas regionales de retaguardia. En tiempos recientes se produjeron dos notables y novedosas excepciones: el zapatismo en las cañadas de Chiapas, y la labor política y electoral de Andrés Manuel López Obrador en Tabasco. No es el momento ni el sitio para escudriñar esta última hazaña, cuyo destino sigue suspendido al desenlace de una batalla partidista nacional. Pero conviene detenerse en el caso zapatista, que indudablemente encierra rupturas y lecciones.

El inmenso mérito de Marcos y de sus colegas en la selva Lacandona no reside ni en el recurso a las armas, ni en la exhaltación de lo indígena, sino en haber organizado duradera y políticamente a un segmento, por pequeño que fuera, de los pobres de este país. Sin duda la retórica de las armas sirvió: la invocación de lo militar permite jerarquías y disciplina que no son fáciles de diseñar o implementar de otro modo. Asimismo, la ubicación audaz del esfuerzo en el seno de comunidades indígenas probablemente facilitó las cosas: regían allí estructuras y lazos previos, sobre los cuales se sobrepuso un esquema nuevo, en una especie de sincretismo organizativo. Pero lo inédito no fueron las armas ni los indios, ni siquiera el trabajo incansable de los famosos catequistas, sino los pobres. El vigor organizativo, la perdurabilidad del esfuerzo, y el innegable carácter excluido de las comunidades en cuestión constituyen, en su conjunto, un hito en la interminable tarea mexicana y latinoamericana de organizar a los desorganizados, de dotar a los pobres –carentes en su

gran mayoría de empleos permanentes y formales– de los instrumentos de su propia lucha.

Esta es la deuda de México con Marcos; deuda cuyo reconocimiento debe permitirnos ver los vacíos e «impensados» (*impensés*: hoyos negros conceptuales) del discurso de David y de la insurrección zapatista entera. Si bien abundan las teorías que supuestamente explican por qué los zapatistas no han mostrado ni volvieron a empuñar armas que supuestamente sí poseen, a casi dos años del alzamiento del día de Año Nuevo todo sugiere una hipótesis contraria: las armas del movimiento armado no existieron, la guerra de guerrillas en Chiapas nunca se inició, el ejército zapatista no es ni fue nunca una fuerza militar. Es eminentemente político. Supo utilizar el casi inexistente armamento del que disponía y un extraordinario sentido escénico y de oportunidad para irrumpir en la vida política mexicana después de menos de 72 horas de combate, sin ninguna posibilidad de persistir en su actividad militar más allá de ese lapso, y sin perspectiva alguna de resistir una ofensiva sostenida por parte de las fuerzas armadas mexicanas. Si bien han aflorado multitud de dudas en torno a lo que realmente sucedió en Rancho Nuevo el primero del año, único combate ofensivo y organizado aparentemente librado por los guerrilleros en ciernes, el valor de los combatientes y la audacia de la comandancia fueron deslumbrantes. Y sin embargo, el Ejército zapatista no es una transfiguración mexicana del guerrillero heroico. Sus integrantes son heroicos, pero no son guerrilleros.

Las supuestas explicaciones del pacifismo zapatista, en efecto, proliferan. En primer lugar, algunos aducen que los insurrectos disponen de un arsenal importante, pero que a propósito lo han escondido para que «el enemigo» no pueda discernir su poder de fuego, ni tomar providencias al respecto. Argumento baladí: las guerrillas, desde tiempos inmemoriales (recuérdese la anécdota de Herbert Mathews en la Sierra Maestra en 1957), exageran sus fuerzas, no lo contrario. Pueden buscar agazaparse: evitar la luz del día hasta no acumular la fuerza necesaria para rechazar los primeros embates del contrincante. Pero ya despojado del escudo de la clandestinidad, el riesgo para un movimiento armado no reside en que el adversario menosprecie su capacidad militar, sino en que la sobreestime y concentre de entrada su poderío en un esfuerzo supremo por liquidarlo. Casi todas las victorias de fuerzas irregulares provienen de la subestimación por ejércitos constituidos de su magnitud y potencial: Vietnam, Cuba, incluso Nicaragua. Y muchas de las derrotas de empeños guerrilleros provinieron de la proclividad a actuar como si contaran con una fuerza que no poseían –Montoneros argentinos en 1976-78; el Che Guevara en Bolivia en 1967, el EGP y ORPA en menor medida en Guatemala en 1981– y no en disimular una fortaleza ya consolidada. Sencillamente no existe lógica alguna que explique por qué Marcos procurara disimular una fibra militar previa y arduamente conquistada.

Segundo argumento con frecuencia exhibido: el Comité Clandestino Revolucionario Indígena dispone de un impresionante poder de fuego –fuerza viva, fusiles de asalto y parque, quizás algunas armas de apoyo, hasta misiles suelo-aire– pero ha desistido de su utilización para no perjudicar los esfuerzos de paz, diálogo y mediación. Como dijo Carlos Fuentes, el que dispara primero pierde. Sólo que la validez de esta tesis permanecería intacta únicamente mientras la otra parte tampoco disparara. Lo cual fue cierto hasta el 9 de febrero de 1995, pero dejó de serlo a partir de esa fecha. Nadie podía cuestionar la decisión de los zapatistas de no ser los primeros en violar la tregua; pero todos hubieran comprendido una réplica a la ofensiva de las fuerzas armadas mexicanas con la misma moneda: plomo y sangre. No lo hicieron, y posiblemente se evitó así una hecatombe; pero difícilmente se comprende que los guerrilleros no hubieran tomado una sola provisión de contingencia: no colocaron minas, ni sembraron francotiradores para cubrir la retirada de su dirigencia, no llevaron a cabo acciones de retaguardia para hostigar al ejército mexicano y facilitar su propio desplazamiento, ni efectuaron operaciones de distinto tipo en otras partes de Chiapas o de la República para disminuir la presión sobre las cañadas.

Finalmente figura la tesis de la conservación de la fuerza existente para esperar un mejor día. Por adversas que se antojen a estas alturas las circunstancias de mediados de febrero, el hecho es que Marcos logró burlar la captura, pudo desplazar a parte de su tropa combatiente a zonas más protegidas, y todo ello sin exponer a los zapatistas, y sobre todo a los simpatizantes desarmados, a la furia ofensiva y sin cuartel del ejército. Este es el argumento más plausible, y no puede ser descartado, pero deja en suspenso una gran interrogante: si los zapatistas no revelaron ni aprovecharon su capacidad militar en tiempos de paz y diálogo, ni tampoco en instantes de enorme peligro y agresión enemiga, si no demostraron su poderío armado al sonreírles la correlación de fuerzas política e internacional, ni tampoco revertirse dicha correlación ¿entonces cuándo? La respuesta puede buscarse en diversos razonamientos más o menos sofisticados que parten todos de una premisa no comprobada –la pre-existencia al 1º de enero de 1994 de una fuerza militar zapatista considerable– o derivar en otra interpretación de la realidad: la inexistencia, desde un principio, de esa fuerza militar, y la construcción paulatina de una verdad eficaz pero peculiar, a saber, la naturaleza virtual del carácter armado del zapatismo. Realidad virtual: materialidad indiscutible de las armas en la percepción del otro, inexistencia radical de las mismas fuera de esa percepción. Los rifles zapatistas fungieron como rifles de verdad, ya que todos los actores pertinentes actuaron en función de su existencia; pero el número de combatientes zapatistas portando fusiles de asalto homogéneos, provistos de parque en cantidades adecuadas, y poseedores del mínimo entrenamiento necesario para servirse de dichos fusiles, no alcanzó nunca a ser significativo.

El zapatismo logró, durante un tiempo, cosechar los frutos de una espléndida operación escénica –la toma de San Cristóbal– y de un desconcierto total y asombroso del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Pudo luego contar con la convergencia de diversos intereses creados, desde Samuel Ruiz y un segmento de la prensa nacional, hasta Manuel Camacho, Cuauhtémoc Cárdenas, las fuerzas armadas y, ante todo, el propio régimen de Salinas. Todos, por diferentes razones, propiciaron un Rashomon al revés o un síndrome de la Mandrágora: cuando narradores o actores distintos cuentan todos lo mismo.

Para el gobierno, una vez acusado el primer golpe –demoledor, irreparable– de Año Nuevo, convenía más amplificar la magnitud del fenómeno, en lugar de minimizarlo. En los primeros días, las autoridades no sólo dieron crédito a las imágenes de San Cristóbal y Ocosingo, sino que además pensaron que la serie de atentados y bombazos que sacudieron a la Ciudad de México (Plaza Universidad, Campo Militar) y a otras ciudades (Acapulco), y que derribaron algunas torres de alta tensión (Tehuacán, Michoacán) y paralizaron sistemas de distribución de agua, formaban parte de una ofensiva nacional zapatista. Pero rápidamente comprendieron que no había tal y que el peligro para el régimen yacía en las repercusiones políticas e internacionales del alzamiento localizado en los Altos, y no en esta supuesta coordinación nacional de actos en realidad aislados los unos de los otros. Vistas así las cosas, era preferible haber sido sorprendido y vapuleado por una auténtica ola insurreccional, bien pertrechada, organizada y armada, que por un grupo pequeño, eficiente y audaz de hombres con subametralladoras, acompañados de una masa innegablemente organizada e imponente, pero desprovista de armas de mayor alcance. Ya entrados en gastos, resultaría mucho más redituable para el régimen exagerar la nota y tratar de transformar la derrota de San Cristóbal en la victoria del 21 de agosto en toda la república. En lugar de ubicar los acontecimientos de los Altos de Chiapas en su justa dimensión –un problema político de gran trascendencia, un rezago social y cultural imperdonable, pero un problema militar minúsculo–, Carlos Salinas de Gortari optó por inflarlos, para luego atenderlos y supuestamente resolverlos. A juzgar por el desenlace de los comicios de agosto, y por la imagen internacional de Salinas todavía al término de su mandato, no debió haber lamentado esa decisión.

Si bien en México siempre es complejo y delicado comentar las posturas e intenciones de las fuerzas armadas, en su seno probablemente se produjo un fenómeno análogo. Lo ideal, por supuesto, hubiera sido evitar la sorpresa y el traslado a Chiapas de nutridos destacamentos de tropa y material militar. Pero al desaparecer esta opción, quizás los altos mandos castrenses prefirieron justificar la concentración abrumadora de fuerza y equipo mediante la denuncia pública y privada de la existencia de un adversario poderoso. Todos recordamos las confidencias reportadas en esos días por los corresponsales de guerra presentes en la zona: 2.000

hombres bajo las armas, 10.000 hombres armados, hasta 12.000 combatientes comandados por el CCRI y el enigmático Marcos. Parece inverosímil la noción según la cual el ejército mexicano aún desconocía a mediados de enero las dimensiones militares del problema que enfrentaba, pero no desmerece la tesis de la exageración: mejor haber sido sorprendido por un enemigo fuerte y hábil, que por un puñado de catequistas y profesores universitarios indefensos, encabezando a miles de indígenas desamparados.

Ni Manuel Camacho ni Samuel Ruiz inventaron o procrearon la rebelión de la selva, pero les vino como anillo al dedo. Al primero, le permitió formular una disyuntiva inmejorable: o salía del gobierno en ruptura con las posturas agresivas y genocidas de los primeros días del año, o resucitaba como figura de primera línea al recibir la encomienda de resolver el principal problema del país. No había pierde. Sólo que ya nombrado Comisionado para la Paz, y encarrilado en la nueva dinámica desatada por la conmoción chiapaneca, Manuel Camacho difícilmente podía convertirse en una fuente de estimaciones equilibradas del poderío del zapatismo y de la intensidad de la guerra. Ni modo que el encargado de lograr la paz desestimara la virulencia, ya sin mencionar la existencia, de la guerra. El interés objetivo de Camacho era contradictorio: que no se reanudaran las hostilidades, sin duda, pero que todos creyeran en la inminencia factible de su reinicio. De las oficinas de Observatorio no emanaría ninguna filtración sobre la impotencia zapatista.

El obispo de San Cristóbal compartía esta ambivalencia. Los acontecimientos del 1º de enero le permitieron neutralizar la ofensiva del nuncio papal, y probablemente del propio Vaticano, en su contra: era intocable el mediador y único interlocutor válido y conocido, si no confiable, tanto de los zapatistas como del gobierno. Se opuso al levantamiento y al recurso a las armas; su compromiso con las comunidades y su conciencia del daño que sufrirían al quedar expuestas a una represión generalizada, explican su oposición. Pero el mediador necesita, como el buzo oxígeno, de la persistencia y fuerza de las partes en conflicto. Sin ellas, su misión se desvanece. Samuel Ruiz no podía revelar la debilidad de los insurrectos sin herirse así mismo. Tampoco podía explicarle a la opinión pública el verdadero estado del equilibrio de fuerzas. Insinuar siquiera que había amainado el riesgo de la guerra por falta de contrincantes contradecía directamente la razón de ser de su nueva función: mediar para evitar una conflagración a punto siempre de reencenderse.

A todos beneficiaba la creencia –no la realidad– de una guerra en Chiapas que implicara dos bandos, es decir, dos ejércitos. A los unos, para mediar y evitar la guerra; a otros, para poner en evidencia las consecuencias de un régimen nefasto; a otros más para explicar su desconcierto el 1º de enero; y al régimen para montar la campaña del

miedo, antes y después del asesinato de Colosio. Todavía en diciembre de 1994, la «toma» zapatista de varias decenas de municipios sirvió para diseñar una primera explicación, rápidamente descartada, de la devaluación. Pero cuando desaparecieron los múltiples motivos que dieron vida y razón a la versión de la guerra, la existencia misma de esta última comenzó a esfumarse. Permanecía –y perdura– lo esencial: la intolerable exclusión y pobreza de las comunidades indígenas en la selva; los impresionantes logros organizativos del EZLN, y los incuestionables abusos de las autoridades, civiles y militares, antes y después del 1º de enero de 1994.

La pista de esta reflexión la proporcionó el propio Marcos, el gobierno y una versión que circuló insistentemente a mediados de año. Según ésta, si bien el EZLN no daba la impresión de disponer de una gran capacidad de fuego estrictamente militar, que le permitiera reanudar las hostilidades en cualquier momento, era preciso recordar que a principios de año sus comandos habían recuperado una tonelada y media de explosivos, y varios millares de detonantes, en las bodegas de Pemex en Palenque. La recuperación de la dinamita había sido ampliamente reseñada por la prensa, tácitamente confirmada por Marcos, y en general dada por buena. Allí residía la «disuasión» zapatista.

El mensaje encerraba una gran verdad, y entreabría una severa interrogante a futuro. La verdad: si a mediados de 1994 la fuerza militar del EZLN consistía en los explosivos capturados el 1º de enero de ese mismo año, por definición los zapatistas carecían de dicha fuerza con anterioridad a esa fecha. Habían sido, hasta entonces por lo menos, una guerrilla sin armas. La interrogante se mantuvo en ciernes hasta febrero de este año, para luego brotar abruptamente en los albores de la primavera ¿Dónde estaban los 1.500 kilos de dinamita? ¿Por qué no los utilizó el zapatismo para por lo menos entorpecer la entrada del ejército a sus zonas? ¿Por qué las fuerzas armadas no encontraron los depósitos inocultables de semejante volumen de explosivos?

La clave del misterio de Marcos y de los zapatistas no se halla en sus orígenes, en confesiones arrancadas a sus fundadores o delatores, en documentos capturados o en la cuenta pública. Queda por descifrar un enigma: si tienen armas, ¿por qué nunca las empuñaron?; si jamás contaron con armas, ¿cómo le hicieron para hacernos creer a todos que sí disponían de ellas? El fin del conflicto y la transmutación de los cuadros paciente y sigilosamente formados a lo largo de los años en militantes partidistas ofrecerá algunas respuestas. Los archivos que nunca se abren y las memorias que nunca olvidan suministrarán otras más.

Por ahora, sólo existe el razonamiento y la deducción. De ambos se desprende una conclusión que se ha podido comprobar a lo largo del interminable proceso de negociación en Chiapas. La tensión descrita al

comienzo de estas páginas entre reformismo y lucha armada afloró en el sitio menos esperado, en la postura negociadora zapatista, no en el combate o en la discusión interna. La contradicción intrínseca entre revolución y negociación suele resolverse en el seno de grupos revolucionarios armados alternando y combinando la guerra y la paz: pelear y negociar simultáneamente, al estilo Vietnam e incluso como lo pudo realizar el FMLN en El Salvador. El carácter revolucionario permite negociar sin generar excesivos temores de claudicación; el carácter armado permite generar acciones armadas esporádicas. Pero en el caso de los zapatistas, su reformismo entraña pero explicablemente obstaculiza la negociación –aunque ésta sea la meta misma de su lucha. Y la ausencia de una opción militar auténtica, siquiera aislada pero altamente simbólica, imposibilita la creación de incentivos para que el gobierno ceda en la mesa de negociaciones lo que ha perdido en el terreno de batalla. Los zapatistas no pueden ni pelear, ni negociar: de allí la prolongación indefinida de las pláticas, la proliferación de las mesas, y el estancamiento del problema de Chiapas.

Otra tesis de *La utopía desarmada* que a mi entender se vio ratificada por los acontecimientos de principios de 1994 es aquella relativa a la violencia a flor de piel en América Latina. En varios capítulos del libro se insiste sobre el carácter fragmentado de las sociedades latinoamericanas, sobre la consiguiente fragilidad de sus sistemas políticos –hoy más democráticos que nunca– y sobre la amenaza perenne del surgimiento de la violencia. Esta no nace de dogmas militantes, o de devociones milenaristas, aunque ambas puedan en efecto hallarse presentes. Emanan de las abismales desigualdades latinoamericanas: sociales, étnicas, regionales, de género y generacionales. El *caracazo* en Venezuela, los motines salvadoreños, guatemaltecos y mexicanos en Los Angeles, la delincuencia en Río de Janeiro, Chiapas, el saqueo de Santiago del Estero, son todas ellas manifestaciones de esa violencia, imprevista y opaca, pero nunca muy distante de la vida cotidiana de los habitantes de la región.

Chiapas fue eso: un recurso desesperado, largamente anunciado, a la violencia. Sorprende por haber tardado tanto, no por haber sucedido. Es una ilusión esperar que sólo porque en algunos países se celebran ya elecciones justas y libres con cierta regularidad, la violencia ha sido desterrada. Y se peca de ingenuidad al suponer que aquellos otros países que han puesto en práctica programas de ajuste económico de corte neoliberal han quedado automáticamente vacunados contra la ira de los sectores más desprotegidos y «pre-modernos» de sus sociedades. El levantamiento indígena muestra lo que innumerables historiadores han sabido desde tiempo atrás: la historia a veces avanza del mal lado, y el pasado sabe cómo vengarse de las embestidas del presente. *Le mort saisit le vif.*



La insurrección indígena reforzó el razonamiento del libro relativo al «mal menor». Aduzco en el texto que la viabilidad del reformismo siempre se ha fincado en el amago de un mal mayor: el espectro del comunismo del que habla Marx en el Manifiesto, las llamadas «clases peligrosas» durante la segunda mitad del siglo XIX, el bolchevismo a partir de 1917, la Revolución Cubana en América desde 1959. Una de las consecuencias de la caída figurativa y literal del Muro de Berlín fue la anulación aparente de ese mal mayor. En nuestro continente, por lo menos, ya no hay a qué ni a quién temerle y, por lo tanto, se han desvanecido los motivos de las clases pudientas y poderosas para tolerar reformas al statu quo. No obstante, en *La utopía...* argumentaba que el «síndrome de Sendero» se mantiene vivo en América Latina. El mal mayor es la violencia, con o sin trasfondo explícitamente político. Si algo va a persuadir a los potentados de nuestros países que es necesaria y deseable la promulgación de reformas sociales de fondo, es esa misma violencia.

El estallido en Chiapas desempeñó un papel de esta naturaleza en México. Le dio, por un breve lapso, hasta el debate televisado de los tres candidatos presidenciales a mediados de mayo de 1994, nuevos aunque fugaces aires a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Revitalizó el debate –y la culpa mexicana– en torno al ignominioso racismo que permea la cultura criolla e incluso mestiza. Pero ante todo, le otorgó un sello de legitimidad a un programa reformista en México, al evidenciar que el neoliberalismo a ultranza impuesto por el régimen de Salinas arrastraba al país al despeñadero. La puesta en práctica de dicho programa podrá demorarse: depende de mil y un factores. Pero la carencia de credibilidad y validez que agobiaba al centro-izquierda comenzó a ser paliada; se lo debemos a Chiapas.

Esta relegitimación del temario reformista, si no de su recetario, es sintomático de una transformación más amplia, que ilustra las mutaciones que ha sufrido la izquierda latinoamericana desde la salida de la versión original en Nueva York de *La utopía desarmada*. De la verdadera explosión electoral celebrada a lo largo de los últimos dos años en América Latina, con comicios nacionales de un tipo o de otro en Venezuela, Chile, El Salvador, Argentina, Colombia, México, Brasil y Costa Rica, de sacudidas sociales ejemplificadas por el alzamiento en Chiapas, han surgido dos tendencias en apariencias contradictorias.

Por un lado, salvo muy contadas excepciones (Venezuela, Argentina y Brasil en una cierta interpretación, podrían contarse entre ellas) a la izquierda le ha ido mal, electoralmente hablando. En algunos casos, se ha desplomado. Es en particular lo que le sucedió a la AD-M19 colombiano, que no llegó siquiera al 5% de los votos, después de haber albergado esperanzas de llevar a su candidato, Antonio Navarro Wolf, a la presidencia, o por lo menos a la posición de fiel de la balanza. En otros países, como El Salvador, el resultado fue ambiguo: Rubén Zamora,

candidato presidencial del FMLN, vence a la democracia cristiana en la primera vuelta, participa en la segunda y obtiene casi el 35% del voto, pero sufre una derrota estrepitosa a manos del candidato de la derecha más recalcitrante, cuestionando el sentido mismo de la guerra que durante más de diez años libraron decenas de miles de salvadoreños.

En México, Cuauhtémoc Cárdenas alcanzó un resultado no sólo por debajo de las expectativas –ilusas, ciertamente– de sus partidarios más fervientes, sino también inferior al que la mayoría de los observadores había vaticinado. Las razones de este desempeño decepcionante son múltiples: van desde el tradicional fraude electoral mexicano, que le sumó votos al candidato oficial y le restó sufragios a la oposición, y la naturaleza profundamente desigual de la contienda electoral, hasta los errores indudables del propio Cárdenas. Estos fueron tanto de orden táctico (no haberse deslindado con claridad de los zapatistas, por ejemplo), como de orden estratégico (nunca haber definido si se dirigía al centro del espectro político, o al extremo). La izquierda mexicana, de Marcos a la socialdemocracia priísta en ciernes, e incluyendo a Cárdenas y al PRD, se mantiene como una fuerza decisiva en el país, pero las perspectivas de acceso al poder por ahora parecen lejanas.

El caso brasileño es más complejo, más matizado. La candidatura de izquierda más definida –la de Lula y el Partido de los Trabajadores– obtuvo un excelente resultado a la luz de su desempeño anterior –pasando de un 16% en la primera vuelta de 1989 al 27%– pero sufre una derrota categórica en relación, de nuevo, a sus expectativas. Incluso se derrumba a la luz de los pronósticos basados en las encuestas realizadas escasos meses anteriores a la votación. En cambio el candidato de centro-izquierda, o de la izquierda «viable» como él mismo se denominó, Fernando Henrique Cardoso, logra una victoria impresionante desde la primera vuelta, obteniendo el mayor mandato de cualquier presidente brasileño quizás en la historia, en una alianza contradictoria con parte de la vieja derecha paulista y nordestina.

Cardoso ha sido toda su vida un hombre de izquierda y su programa ostentó una clara inclinación progresista. Pero es evidente también que el fue el candidato de la derecha brasileña, el único que pudieron hallar para detener a Lula. ¿Ganó la izquierda en Brasil, o perdió? Depende de qué se entienda por ganar y por izquierda. Que Lula y el PT representaban la opción más radical, progresista y contraria a la vorágine neoliberal no es discutible. Pero tampoco lo es que Cardoso y su gobierno no equivalen a una versión brasileña de Salinas y Menem. Han acelerado las privatizaciones, pero también han elevado los aranceles. Se han aferrado a un plan de estabilización ortodoxo, pero han ido devaluando la moneda. Se han mantenido en su esfuerzo por desindexar la economía del país, pero también han empezado a poner en práctica una reforma fiscal que permita redistribuir ingreso y riqueza, y han comenzado a repartir tierra,

por primera vez en Brasil en 35 años. El régimen es objeto de infinitas protestas, manifestaciones y denuncias, pero conserva el apoyo de amplios sectores de la izquierda no-petista. Las alianzas socialdemócratas por ahora se inclinan claramente hacia la derecha, principalmente en dirección de los viejos caciques nordestinos del PFL. Pero quién sabe si Cardoso persistiendo en esta vía, al llegar la etapa realmente redistributiva de su gestión, no sustituya a los privatizadores de ayer con activistas y curas de mañana. El caso brasileño no admite una fácil taxonomía: la clasificación es etérea.

Por último, se produjeron algunas sorpresas que no desmienten la tendencia general, pero que insinúan el reverso de la medalla: en las elecciones presidenciales en Venezuela, la votación de izquierda, dividida entre el apoyo del MAS y del Partido Comunista a Rafael Caldera, y la candidatura de Andrés Velázquez por Causa R, rompió el clásico bipartidismo adeco-copeyano, llevando a Caldera al Palacio de Miraflores y a Causa R a un virtual empate con los dos partidos tradicionales. Y en la Argentina, surge otra sorpresa: la irrupción del Frepaso y de José Bordón y «Chacho» Alvarez, que por primera vez en la historia argentina posperonista logran desprenderle un gajo –aún minoritario– de su base social al justicialismo de antaño del general Perón. El Frente para un País Solidario pierde la elección presidencial, ni siquiera logrando imponer una segunda vuelta, pero derrota a la Unión Cívica Radical, quebrando por lo menos durante una elección el monopolio radical de la oposición al peronismo. Y por último en Uruguay, el Frente Amplio no conquista la presidencia pero conserva la intendencia de Montevideo, y al igual que en la Argentina y en Venezuela, confirma el ocaso del bipartidismo clásico de blancos y colorados, logrando un virtual triple empate en la votación. Pero sorpresas aparte, estos no fueron buenos años electorales para la izquierda en América Latina.

No deslumbra por su obviedad la explicación profunda y común de esta retahíla de derrotas electorales de una parte considerable de la izquierda latinoamericana. Más allá de las razones evidentes e incontrovertibles –el efecto Muro de Berlín, la moda neoliberal que justifica la inevitabilidad de cada triunfo con la victoria anterior y vecina–, vienen a la mente tal vez dos motivos adicionales. El primero ha sido la sistemática subestimación por parte de la izquierda del impacto que surte entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad un programa de estabilización económica exitoso. En países azotados por la hiperinflación –Argentina, Perú– por una elevada y longeva inflación –Brasil– e incluso por unos cuantos años de alzas de precios moderadas –México– el alivio que entraña un alto a las espirales inflacionarias es a la vez enorme y difícil de detectar.

La izquierda suele menospreciar el tema –primer error– y, sobre todo, permite que la derecha la coloque en el papel de defensora de la inflación y adversaria de la estabilidad de precios. Los candidatos o dirigentes

progresistas terminan por hacerla de Casandras, advirtiendo sin cesar contra los peligros de tal o cual programa y del exorbitante costo por venir (y suelen tener razón por lo demás, pero cuando ya es muy tarde para que su acierto genere consecuencias electorales). Los candidatos de la estabilidad la pregonan y exaltan, y denuncian a la vez la hipocresía de la izquierda, opuesta a cualquier intento de controlar la inflación debido a viles motivaciones políticas. Cuando llega la cruda –en México el 19 de diciembre de 1994; en Argentina un par de meses después de la reelección de Menem en 1995, en Brasil con el gradual y disimulado retorno de la indexación –las elecciones ya pasaron, y el recuerdo de lo que cada quien dijo y propuso en plena campaña se nubla. De nada sirvió haber tenido razón prematuramente.

En segundo lugar, mientras la izquierda sea izquierda, seguirá acogiendo en su seno a una estirpe extraña, noble y excepcional de seres humanos: los militantes. Nadie supera su abnegación, su espíritu de sacrificio y entrega a la causa; pero contados son aquellos que pueden convivir con militantes convencidos o menos aún, votar por ellos cuando no se comparte su condición. La izquierda electoral en América Latina ha encerrado siempre una tensión: entre la necesidad de captar votos en el centro del espectro político, y la disponibilidad de militantes acendrados dispuestos a darlo todo para la causa revolucionaria... que ahuyenta a dichos votantes o que divide al partido, enajenando así a los electores.

Eso le sucedió al PT en Brasil, a Cárdenas en México y a Bordón en Argentina (ver, por ejemplo la desertión de Pino Solanas de la causa del Frepaso). Sin sus militantes, estos candidatos no hubieran alcanzado nunca la fuerza que exhibieron en los mitines multitudinarios, en las encuestas espanta-burgueses y en elecciones previas. Pero sus mismos militantes le impiden dar el paso final, el último jalón, porque éste implica concesiones, transacciones y, en efecto, a veces claudicaciones. Quizás la izquierda latinoamericana vive apenas su adolescencia electoral, y simplemente le falta tiempo para que las derrotas –y las victorias– separen la paja del trigo, y coadyuven a consumir la conversión de militantes revolucionarios en caza-votos reformistas. Mientras no suceda, la cuesta electoral será agreste y la victoria esquiva.

Ahora bien –y he aquí otra tendencia– estos años no han sido tan malos en lo que toca al debate sustantivo o ideológico. Esquemmatizando sólo un poco, se podría argüir que si hace algunos años candidatos de izquierda triunfaban en elecciones a lo largo y ancho del continente para luego poner en práctica los programas conservadores de sus adversarios, ahora sucede en alguna medida lo contrario. Mejor dicho, los temas centrales de la izquierda –la lucha contra la desigualdad, el combate a la pobreza, las críticas al modelo neoliberal, la sensación de que se llegó demasiado lejos en las privatizaciones, la liberalización comercial y la atracción a toda costa de la inversión extranjera– comienzan a ser objetos de un consenso

creciente. Desde el Banco Mundial en Washington hasta el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Nueva York; desde la coalición que apoya al septuagenario Caldera en Caracas a la Concertación Democrática que apoya al segundo Frei en Santiago; desde el esfuerzo –fracasado, ciertamente– de Bill Clinton por aumentar los impuestos y el gasto público en infraestructura, educación y sobre todo salud en Estados Unidos, hasta el predominio abrumador en las elecciones brasileñas de dos candidatos que en cualquier otro país serían, ambos, claramente de izquierda: las ideas de la izquierda han emprendido el camino de la reconquista de la hegemonía cultural en América Latina.

No se trata, por supuesto, de un idilio. El neoliberalismo sigue vivo y coleando, y sus tesis esenciales todavía rigen el acontecer económico y social del continente. Pero su reinado ya no es el de antes, y en alguna forma está comenzando a sufrir los estragos del mismo devenir que devastó a su antecesor: el fracaso. Como se sabe, el advenimiento de las políticas de radicalismo de libre mercado se debe en gran parte a dos factores clave: el agotamiento del esquema anterior, de industrialización vía sustitución de importaciones, y la eterna propensión latinoamericana a importar ideas e ideólogos. Nunca se supo a ciencia cierta si los nuevos experimentos encerraban méritos propios y virtudes intrínsecas. Su fuerza residía más bien en la debilidad de sus adversarios políticos e ideológicos. Ahora comienza a suceder algo semejante con el neoliberalismo. Al no arrojar resultados afortunados ni entregar buenas cuentas –el crecimiento en muchas partes no llega; la desigualdad se agrava; la desindustrialización se vuelve rampante; la sed de financiamiento externo resulta insaciable– se convierte en fácil blanco de ataques de buena lid. Y tesis opuestas, como la configuración de una política industrial, una reforma fiscal que aumenta tasas, recaudación y carga tributaria, la reactivación económica mediante la inversión pública en infraestructura y educación, adquieren de nuevo derecho de ciudad en el paraíso neoliberal perdido.

Es probable que esta evolución persista. En algunos casos excepcionales –cuya importancia no puede ser soslayada, en vista del peso específico de los países que involucra (Brasil, Argentina)– la izquierda puede llegar a participar en el gobierno. Lo que es quizás hoy el régimen más progresista de América Latina –el gobierno demócrata-cristiano/socialista de Eduardo Frei en Chile– constituye un ejemplo notable al respecto. Tanto más que la coalición y la línea política que lo inspiran pasaron la prueba suprema: presentarse ante el sufragio universal después de una gestión de gobierno, y ser ratificados por los votantes. La elección de Frei en 1994 constituyó una especie de reconducción del equipo anterior de Patricio Aylwin, y de su programa. Con todas las dudas y bemoles que pueda suscitar la participación de parte de la izquierda chilena en la administración pública, la lección es alentadora. La izquierda unida... a otras fuerzas, logra mejores desempeños que sola: la larga experiencia

acumulada enseña que esa es la peor receta de todas, y que conduce irremediabilmente al desengaño. Pero en la mayoría de los casos, lo más probable es que las ideas de la izquierda avancen, aunque sus resultados electorales permanezcan insuficientes para permitirle dirigir un gobierno. La intersección de estas tendencias debiera ser el ingreso de la izquierda a gobiernos de amplia unidad nacional, en posiciones inevitablemente minoritarias mientras su fuerza electoral no permita algo más, pero donde su ingerencia en el imperio de las ideas sea cada vez más mayor. Al fin ese ha sido siempre su fuerte: pensar lo que conviene hacer y cómo hacerlo, para que otros lo hagan.

*La utopía desarmada* pretende ser a la vez un recuento histórico y una fotografía del estado actual de la izquierda en América Latina. El primer esfuerzo, revisar la historia y narrar parte de la epopeya de esa izquierda, es una tarea que nunca termina, ciertamente, pero cuyo desenlace, tal y como se presenta en este libro, sólo podrá ser modificado por espectaculares revelaciones de archivo o de memorias escritas. No han surgido hasta la fecha. Tampoco, por cierto, se han confirmado las acusaciones soterradas o las insinuaciones de salón según las cuales algunas o muchas de las entrevistas en las que se basa este libro fueron obtenidas subrepticia o ilegítimamente. Mientras ningún entrevistado diga en público que él (o ella) no sabía de qué se trataba, que fue engañado, o que no dijo lo que estas páginas le atribuyen, críticas como ésta carecerán de valor y pertinencia. Su verdadero sentido será cada vez más evidente, correspondiendo a tácticas de abolengo en otros menesteres, y seguimientos muy identificados del espectro político: cuestionar los procedimientos e intenciones, para eludir la discusión sobre el fondo.

La segunda aspiración, la faena fotográfica, es más ardua: todo cambia, y algunas transformaciones son súbitas y cruciales. A ojos del autor, este libro ha salido bien librado de su primer bienio, por convulso y pletórico de acontecimientos que haya sido. Pero el juicio del autor es lo de menos; el que cuenta, el de los lectores, sigue pendiente.